

Trabajo Fin de Grado

La condena de los excluidos en la Europa y la España del siglo XXI: un sistema penal criminalizador en un Estado de Bienestar débil

Autora

María José Riofrio Gómez

Director

Pablo Lópiz Cantó

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

-2020-

“Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”

Gabriel García Márqués

“Podría suceder que una de las mayores fuentes de inseguridad en la sociedad fuera no tanto la existencia de delito, sino la extendida alarma creada en torno a ella debido a la ignorancia o el interés”

Daniel Wagman

La condena de los excluidos en la Europa y la España del siglo XXI:

Un sistema penal criminalizador en un Estado de Bienestar débil

The sentence of the excluded in Europe and Spain of the 21st century: a penal system criminalizing and a Welfare State weak

María José Riofrio Gómez

Resumen

Desde que se conocen las sociedades el sistema de castigo siempre ha existido. Lo único que ha ido cambiando es la manera de castigar. La evolución del sistema penal está estrechamente vinculada al desarrollo de las políticas sociales y económicas. El debilitamiento del Estado de Bienestar en España, la aplicación de políticas neoliberales durante la recesión económica y las nuevas relaciones salariales tendrá como consecuencia el aumento de la pobreza y/o exclusión social. La forma de abordar los problemas sociales por parte del estado y la reconceptualización del sistema penitenciario son claves para entender el aumento de la criminalización de los colectivos *marginales*. El Trabajo social debe evolucionar y gestionar el daño social desde diferentes modelos.

Palabras clave: Sistema penal, Estado de bienestar débil, exclusión social, pobreza, criminalización de la pobreza

Abstract

Since societies are known the punishment system has always existed. The only thing that's changed is the way to punish. The evolution of the criminal system is closely linked to the development on social and economic policies. The weakening of the welfare state in Spain following the implementation of neoliberal policies during the economic recession and the new wage contracts has the consequence of the increase in poverty and/or social exclusion. How to address social problems by the state and the new way the prison system works are key to understand the increase in the criminalization of marginality. The social work must evolve and manage the damage from new models

Keywords: *penal system, weak Welfare State, social exclusion, poverty, criminalization of poverty*

1.	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	JUSTIFICACIÓN, INTERÉS SOCIAL Y FORMULACIÓN DEL “PROBLEMA”	1
1.2.	ESTRUCTURA BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN.....	2
1.3.	AGRADECIMIENTOS	3
2.	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
3.	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	4
4.	DESARROLLO SOCIOHISTÓRICO DE LA JUSTICIA Y SUS FORMAS EN LA ERA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA.	5
4.1	LA JUSTICIA EN LA ERA MODERNA (S. XVI – S.XVIII).....	5
4.2	ESTRATEGIAS PENALES DEL SIGLO XIX HASTA LA ACTUALIDAD: CASTIGAR Y ASISTIR	9
5.	INFLUENCIAS DE LA IDEOLOGÍA NEOLIBERAL: SISTEMA PENAL FUERTE Y UN ESTADO DE BIENESTAR DÉBIL.	13
5.1	LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA COMO DAÑO COLATERAL DEL DÉBIL ESTADO DE BIENESTAR ESPAÑOL.....	17
6.	LA CRIMINALIZACIÓN DE LA MARGINALIDAD.....	21
6.2	LA CÁRCEL COMO UN ESPACIO DE EXCLUSIÓN	26
6.1	EL FENÓMENO DE LA PRISIONALIZACIÓN.....	28
7.	CONCLUSIONES	31
8.	BIBLIOGRAFÍA	34

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación, interés social y formulación del “problema”

Mi interés por el sistema penitencial empezó con una asignatura durante el último año de carrera, en la que se nos planteaban las condenas no como una simple consecuencia de un acto delictivo, sino como una consecuencia de toda una serie de factores sociales, de género, económicos e incluso políticos, que habían sido determinantes en la condena de varias personas. La justicia es algo que está muy cerca, pero a la vez muy lejos. Muy cerca porque tienes las reglas constantemente en mente, sabes por qué cosas podrías ir a la cárcel, por qué cosas tendrías que pagar una sanción, qué acciones puedes cometer y cuáles no. Das por hecho, o en este caso yo lo hacía, que seguramente las personas que estuvieran cumpliendo alguna condena, del tipo que fuese, o pagando una sanción, eran personas que habían cometido un delito y lo estaban pagando.

Era una visión muy simplista de la justicia por mi parte. Puede ser que tener una visión tan sesgada de la realidad me produjese ese impacto cuando descubrí que todo cuenta y que todo resta, que el sistema penitencial no es tan justo, simple e independiente como creía, sino que, todo lo contrario, son grandes influencias que lo motivan a ser de una forma u otra. Hay una frase que me hizo cuestionarme muchas cosas. Te tienen que pillar. Parece obvio, y una afirmación que podría pasar desapercibida, sino la hubiera escuchado decirla con tanta contundencia a mi profesor. Y empezaron las preguntas. *“Te tienen que pillar. Tiene que ser un delito muy grande para que te pillen ¿no? Aunque bueno, no porque tengo una amiga que la han multado por ir con maria por la calle.... y llevar droga no es en realidad muy grave tampoco, mm... grave es matar o secuestrar a alguien, o robar... bueno, robar, claro si robas una chuche en una tienda, es muy poco, no sé, delito es robar un banco, ¿no?”*

Te tienen que pillar. Pero para que te pillen tiene que ser un delito perseguido. Me refiero, controlar a todo el mundo en todo momento requeriría de muchísimos recursos tanto económicos como humanos a la par de que sería casi imposible controlar a todo el mundo. Todos hemos cometido algún delito: hacer botellón en la calle, en una vía pública, no pagar el bus, colarse en el metro, etc. Pero no a todos nos han pillado. Por eso, parece lógico que se prioricen los delitos. La cuestión es: ¿cómo establecer ese orden? ¿Cómo se decide la gravedad de estos hechos? ¿Lo deciden sólo los entendidos de esta materia o quiénes? Todas estas preguntas fueron respondiéndose. Pero había una en especial que me causaba verdadera curiosidad. ¿Por qué la mayor parte de la población a nivel mundial que se encuentra en la cárcel es gente pobre? ¿Cómo es que se vincula la pobreza con la delincuencia de manera que parezcan las dos caras de una misma moneda? ¿Qué explicación hay? ¿Todos los pobres necesariamente van a estar en la cárcel alguna vez? ¿Qué teorías explican este suceso? ¿Qué estudios hay? Todas estas preguntas no podían ser del todo respondidas sin una investigación bibliográfica profunda. La elección de mi trabajo de fin de grado no podría haber sido otra.

La sociedad ha sido construida con la justicia como una de las bases imprescindibles para su prosperidad. Es un tema que por su evidencia no es casi necesario explicar el interés social que como trabajadora social produce. El sistema penitencial condiciona la vida de muchos colectivos con especial vulnerabilidad, y nosotros como agentes de cambio debemos de ser conscientes de cómo lo hace, por qué y en qué medida podemos mitigar estas consecuencias. Si bien es cierto que el trabajo social no tiene casi margen para incidir en cuestiones jurídicas, sí lo tiene, o al menos en una mayor medida, para hacerlo dentro de estos colectivos más afectados por el sistema punitivo actual.

Existen numerosas investigaciones sobre pobreza, exclusión social y cárcel, sin embargo lejos de querer seguir la misma línea de vincular la pobreza con la delincuencia y que en consecuencia parezca una relación casi natural, quería enfocarlo de forma que se pueda ir más allá, y que pueda ser un análisis de cómo se ha llegado a una instauración de este tipo de sistema penitencial en un sistema de bienestar, el cual apuesta por la consecución de un reparto de los recursos más igualitarios y de la universalidad y gratuidad de los servicios esenciales como son la vivienda, el trabajo y la salud.

1.2. Estructura básica de la investigación

Para poder entender cómo es nuestro sistema penal, es imprescindible buscar en los inicios de este y saber cuál ha sido su evolución. En primer lugar, se va a hacer un recorrido histórico de la justicia desde la era Moderna (s. XVI – s. XVIII) hasta la actualidad, para poder entender cómo se han llegado a instaurar el sistema penitenciario español.

En segundo lugar, se hablará de la relación que guarda la aparición de los sistemas de bienestar en Europa y España, en una época donde la ideología más extendida es el neoliberalismo, con el desarrollo de la justicia y el sistema penal. Así es como llegamos a las diferentes realidades que se han analizado, que son la criminalización de la marginalización a partir de la creencia extendida de que un grupo marginal está necesariamente involucrado con el delito, la exclusión social y la pobreza como daños colaterales de un sistema punitivo y un Sistema de bienestar débil. Además, se incidirá en la cárcel como un espacio de exclusión y a la vez, cómo se crea una subcultura carcelaria con sus normas y sus relaciones de poder.

En tercer lugar, se tratará de forma más específica las repercusiones de un Estado de bienestar débil, combinado con un sistema punitivo y penalizador de los colectivos marginales. Así, se hará referencia a las definiciones y repercusiones de pobreza y/o exclusión social.

Para finalizar se hará una conclusión final abarcando el punto de vista desde el trabajo social.

1.3. Agradecimientos

En primer lugar, he de decir que he podido disfrutar de este tema, he aprendido mucho. Me ha ayudado a reflexionar sobre temas antes nunca vistos, dejando en mí una sensación de insuficiencia y de querer abarcar más. No obstante, soy consciente de que ha sido una gran oportunidad para abrir un nuevo campo de investigación desde una perspectiva de trabajo social en el ámbito penal.

Agradecer, por supuesto, a mis padres, por el apoyo y la confianza no sólo en este trabajo, sino en todos los aspectos de mi vida. Por darme el espacio de equivocarme, de crecer. A mis hermanas, por animarme, en momentos de desánimo y cansancio. A mi sobrino, por todas las tardes esperando a que acabara de avanzar en el trabajo para jugar conmigo.

También ha sido un placer trabajar bajo la supervisión de Pablo Lopiz, mi tutor, el cual ha sido paciente y me ha ayudado dándome las herramientas necesarias para desarrollar teóricamente el presente trabajo de fin de grado.

2. Objetivos de la investigación

Los planteamientos antes de empezar a investigar acerca de lo que iba a ser mi trabajo de fin de grado han ido siendo modificados a la par que iba recopilando información e iba aprendiendo más acerca del tema. A continuación, se muestran de manera esquemática, tanto los objetivos generales como específicos

A. Conocer en profundidad la evolución de la justicia y el sistema penal a lo largo de la historia.

- a. Realizar un recorrido histórico desde la era Moderna hasta la actualidad.
- b. Describir las diferentes características de los métodos de castigo y sistemas penitenciarios
- c. Conocer los contextos en los que se desarrolla la evolución de la justicia y el sistema penal

B. Investigar la relación existente entre la exclusión social y la pobreza y el debilitamiento del Estado de bienestar y el sistema punitivo español.

- a. Comprender la situación del Estado de Bienestar español y del sistema penal actual.
- b. Describir los conceptos de pobreza y/o exclusión social
- c. Investigar la relación entre la pobreza y/o exclusión social y la situación del Estado de bienestar
- d. Identificar las consecuencias del sistema penal en las poblaciones en riesgo de exclusión y pobreza

3. Metodología de la investigación

La metodología utilizada en el presente trabajo tiene una perspectiva cualitativa puesto que se han utilizado recursos documentales de opinión como ensayos, artículos y libros para la recogida de información. Por otra parte, también se han usado datos cuantitativos recogidos a través de encuestas y valoraciones realizados por el INE. El presente trabajo es el resultado de análisis, comparativas y conclusiones que se han extraído de una revisión bibliográfica exhaustiva de las anotaciones y estudios realizados por autores como Foucault o Giddens.

4. Desarrollo sociohistórico de la justicia y sus formas en la era moderna y contemporánea.

4.1 La justicia en la era Moderna (S. XVI – S.XVIII)

La justicia se ha vinculado con el castigo al desobediente, delincuente o al “desviado social” y este, a su vez, ha estado durante siglos unido a la violencia. La tortura, el cuerpo supliciado, las amputaciones y las descuartizaciones eran ejemplos de castigos aplicados a ciertos delitos. Eran realizados públicamente, pareciéndose más a una obra de teatro cruel que a un acto de justicia en la que contaban con un público deseoso de ver el castigo elegido. Se realizaba de este modo para crear temor y respeto por la ley, y que así no se repitiesen los mismos crímenes, puesto que, de hacerlo, sufrirían las mismas consecuencias. Se podría decir, como bien definió Foucault, que se trataba de una fiesta punitiva, puesto que el castigo era una especie de espectáculo creado para controlar e inculpar.

El fin de esta fiesta punitiva llegó cuando el objetivo principal se desvirtualizó, se dejó de ver al criminal como el culpable para ser el verdugo y que los jueces fueran los asesinos. La ejecución pública, por otro lado, en lugar de provocar miedo en los espectadores, lo que hacía era reanimar la violencia, por lo que el castigo pasará a ser la parte más oculta del proceso penal. Además, la decadencia de este sistema coincide con el inicio de la Modernidad, que siguiendo a Giddens (1999) empieza en el siglo XVII. El inicio de esta nueva era tiene como marco histórico el éxodo de las zonas rurales a las ciudades industrializadas, puesto que en las zonas rurales el comportamiento y la mentalidad seguían dominados por códigos morales o religiosos y no por la ley o a la ciencia.

Las sociedades modernas están marcadas por el surgimiento de instituciones como el Estado-Nación y los aparatos administrativos modernos (...) Otra característica de la Modernidad es la producción capitalista sistemática (...) a nivel económico engendran una modificación en la manera de cometer delitos(...) el punto blanco de los ataques pasan a ser las propiedades y no más el cuerpo(...) Por tanto(..) el aparato de vigilancia constituye una tercera dimensión institucional asociada con el capitalismo y el industrialismo (...) Así, la modernidad pasó a preocuparse en punir crímenes que antes no se castigaban, como consecuencia el perfil de la delincuencia cambió (...) Los mendigos y las clases más desfavorecidas, antaño considerados como imágenes vivas de Cristo, van a pasar a ser considerados como la encarnación de la desocupación y la vagancia. (Peña Martínez, 2019, pp. 35-38)

En este contexto, se crean las cárceles que, en un principio, no tienen la función de establecimiento o institución donde se cumple una condena, sino que era un espacio de retención. Se encerraba al posible delincuente el tiempo que se tardaba en juzgar el hecho del que se le acusaba, para después imponer un

castigo, que habitualmente era corporal (suplicio¹). No había distinción alguna entre el sexo, la edad o el delito cometido, aglutinaban a todos aquellos posibles delincuentes en estructuras pequeñas y sin ventanas. Las condiciones de higiene eran escasas, el trato era deplorable, y las celdas oscuras y pequeñas, por lo que en la mayor parte de las cárceles se daban lugar a la propagación de enfermedades y al aumento de la delincuencia. Para los penalistas de la época era un sistema que cuidaba que el criminal tuviera el mismo dolor que la víctima. Sin embargo, para los reformistas sólo se trataban de castigos crueles, donde los condenados no tenían derecho a defensa y cuyas declaraciones eran obtenidas mediante tortura.

Durante el siglo XVIII, con la aparición de la pena privativa de libertad, surgieron nuevos debates acerca de la funcionalidad de las prisiones y los efectos de estas en los presos. Todos estos nuevos análisis sobre el sistema penal van a estar influenciados por las ideas de la Ilustración². Por lo tanto, los estudiosos de aquella época se caracterizarán por tener una visión crítica de estos sistemas y tratarán de defender la implantación de los derechos individuales de los presos y su dignidad (López Melero, 2012, p.402). Creían que las prisiones no eran espacios pensados para custodiar a los presos, sino que estaban destinados a destruir a la persona.

Así pues, es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y en el seno de la corriente del Derecho ilustrado frente al Derecho penal del Antiguo Régimen, que se hizo patente la necesidad de humanización y secularización del castigo. Fue en este siglo cuando se publicaron textos en contra del derecho Penal y procesal y estudios en los que se intenta comprender al criminal y explicar qué causas hacen al criminal. Landizábal (1782) en su libro *Discurso sobre las penas* critica los principios de legalidad, culpabilidad, personalidad y proporcionalidad; Franz Joseph Gall intenta relacionar la estructura cerebral y las inclinaciones criminales; C. Tomasio manifiesta su preocupación por las instituciones penales; Montesquieu relaciona el comportamiento criminal con el entorno natural y físico; Voltaire critica el modo en el que se desarrollan los juicios y pone en duda que el Código Penal sea el único y más adecuado modo de combatir la delincuencia.

“El discurso de los ilustrados en esta materia se centraba en el cuestionamiento, en la crítica a la justicia ineficaz y arbitraria, de la desproporción entre los delitos y las penas, y el fin de la tortura” (Gómez Bravo, 2006, p. 602). Una de las obras que más se destaca es la obra de Beccaría (1764) *De los delitos y las penas*, en la que se criticaba la crueldad y desproporción de las penas y se defendía una concepción utilitaria

¹ “El suplicio se define como “Pena corporal, dolorosa, más o menos atroz para Jaucourt (Foucault, 2002, p. 32); y añade, “es un fenómeno inexplicable a lo amplio de la imaginación de los hombres en cuestión de barbarie y a la crueldad” (Foucault, 2002, p. 32)

² La Ilustración fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico desarrollado en Europa durante el siglo XVII. Tiene como objetivo básico usar la razón como base principal de conocimiento. Inspiró grandes cambios sociales y culturales, como los cambios en la penalidad de los siglos posteriores.

de la pena. Su libro podría considerarse la base del nuevo rumbo de justicia penal , en el que se distingue hasta siete principios que debían de seguir, según ella, para poner límite al poder punitivo del Estado.

1º) principio de racionalidad; 2º) principio de legalidad de los delitos y de las penas; 3º) garantías procesales; 4º) principio de igualdad; 5º) principio de proporcionalidad; 6º) dulcificación de las penas; 7º) los fines de la pena, agilización en la administración de justicia y prontitud de la pena, haciendo especial hincapié en la publicidad de los juicios y en la publicidad de las pruebas del delito (López Melero, 2012, p. 420)

En España, el cambio de la penalidad tradicional a una penalidad influida por la racionalidad de la época ilustrada se llevó a cabo de la mano de Manuel Lardizábal y Uribe, el cual, tras ser nombrado encargado de realizar una recopilación legislativa española en 1777, publicará en 1782 el *Discurso sobre las penas* influido por el discurso de Cesare Beccaria (Gómez Bravo, 2006). En esta obra va a diferenciar los tipos de pena, las cárceles, y sus espacios, además de realizar una crítica a la sociedad estamental española y cómo sus ideas influían en el sistema penal español.

En Europa paralelamente se publica otra obra de pensamiento reformista. Se trata de la obra de John Howard (1777) *État des prisons, des hospitaux et des maisons de forcé* concebida como un informe de las cárceles europeas. En un periodo donde la caridad y la moral cristiana son la base de todo el pensamiento social, la obra de Howard llega para mostrar cómo en las cárceles se estaba produciendo la antítesis de la moral cristiana, y criticará también su función únicamente evangelizadora. Las reacciones a la obra de Howard de los diferentes países europeos no se hicieron esperar. En Inglaterra, por ejemplo, sirve para remover los cimientos del encierro masivo que se estaba haciendo desde que se publicaron las Leyes de Pobres (Gómez Bravo, 2006)

Las novedades en la nueva forma de ver la justicia produjeron el surgimiento de nuevas ideas sobre la estructura y funcionalidad de la prisión. Bentham (1791) en su obra *Panóptico* propone la construcción de las nuevas cárceles con una especie de torre alta en medio de estas, a través de la cual se pudiera vigilar a los reclusos, sin que estos pudieran ver ni quienes les vigilaba ni cuando estaban siendo vigilados. Había ideado una “diabólica máquina de represión basada en la incertidumbre y creada en la mente del vigilado, que le impedía actuar libremente” (Montserrat López Melero, 2012, p.420) Además, propone tres criterios que debían de seguir todas las instituciones penitenciarias: 1) la ausencia de sufrimiento corporal, 2) la severidad debía de mantenerse puesto que los reclusos no han de encontrarse mejor que en un régimen abierto, 3) la economía, gastando únicamente lo necesario y 4) el fin último de este encierro era la reinserción del delincuente en la sociedad, y la cárcel supondría el aprendizaje y la preparación para este paso. Este modelo sólo triunfó en Estados Unidos.

Con la construcción de este modelo arquitectónico las cárceles se transforman en un laboratorio conductual, una vez que se podía observar, registrar y modificar conductas. Así surge una ciencia del crimen y del castigo cuyas intervenciones redefinen las relaciones entre Estado y las clases sociales desfavorecidas (Peña Martínez, 2019, p. 44)

A pesar de que este sistema sólo triunfara en Estados Unidos, a partir de este modelo se desarrollaron tres tipos de regímenes carcelarios: el filadélico o pensilvánico, el auburniano o de la regla del silencio, y el progresivo.

El modelo progresivo fue el que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX en Europa. Fue un modelo centrado en la adopción de un mayor dinamismo y con una finalidad correctiva, que compone al encierro en varias etapas. La primera consistía en el aislamiento diurno y nocturno y con la obligatoriedad del trabajo. La segunda era la labor común con el resto de los presos durante el día y el aislamiento en la noche. La tercera, era la libertad condicional. El preso tenía derecho a ir pasando por estas etapas, dependiendo de si su actitud y comportamiento eran los correctos (Montserrat López Melero, 2012)

En definitiva, durante los siglos XVII y XVIII se produce una gran evolución en la manera de entender la justicia y los objetivos de esta. Al principio, centrada en los suplicios para después ir centrándose más en dañar el alma para producir un recuerdo duradero de lo que había sido el encierro. Las cárceles tienen como principal objetivo la incorporación de hábitos, adiestramiento social y la prevención de futuros delitos, ya que la libertad era un derecho muypreciado. No obstante, como veremos, la legitimación de la cárcel es temporal y aparecerán nuevos cuestionamientos.

4.2 Estrategias penales del siglo XIX hasta la actualidad: castigar y asistir

La herencia de la preocupación racional sobre los sistemas penitenciarios del siglo XVIII y la convicción de que los comportamientos individuales y sociales pueden llegar a ser susceptibles de estudio científico en cuanto a sus causas y elementos determinantes de la delincuencia, se encuentran con

(...) un apoyo fundamental en la difusión de la obra de Lombroso y, en general, de la Escuela Positiva, que coloca en el vértice de su programa la necesidad de una ejecución penal rehabilitadora, orientada hacia el tratamiento científico-individualizado y reeducador del delincuente (de la Cuesta Arzamendi, 1993, p. 10)

El sistema progresivo que se fue forjando en Europa durante la primera mitad del siglo XIX dio como resultado el desarrollo de los nuevos sistemas penitenciarios, entre los que resalta el sistema español de Montesinos.

Su sistema progresivo(..) supuso un paso muy importante en el sentido de la resocialización de los delincuentes. Montesinos implantó un sistema dividido en los siguientes periodos: a) Primer período (“De los hierros”). Consistente en pasar sin contacto con los demás presos sujeto a la cadena o hierro que por su condena le correspondía, realizando tareas de limpieza y, posteriormente, a un taller, aunque de forma voluntaria, para aprender o desempeñar un oficio; b) Segundo período (“Del trabajo”). El trabajo era fundamental al considerar que era el mejor medio para reformar a los delincuentes; y c) Tercer período (“De la libertad intermedia”). En él se trataba de poner a prueba la rehabilitación dado que les permitía salir, a los presos, a trabajar al exterior de la prisión sin vigilancia (López Melero, 2012, p. 423)

El sistema penitenciario propuesto por Montesinos es un sistema humanista, cuyo principal objetivo era la corrección y reinserción del penado, y para que esto sucediese era necesario que no se perdiera la capacidad de socializar de los presos, ya que sino no podrían mejorar. Para Montesinos era primordial tratar a cada preso como una persona con sus propias circunstancias, características y crímenes para imponer las medidas sancionadoras equilibradas a lo que cada uno era y necesitaba.

La consecución de los derechos del hombre en las distintas Constituciones de Estados Unidos y de Francia y la necesidad de definir qué era la pena permite el cuestionamiento del rumbo que las instituciones penitenciarias debían de tomar por muchos pensadores y legisladores. En España, influyeron en estos nuevos cambios figuras como Concepción Arenal, que fue pionera en la humanización de las cárceles y que es de suma importancia para la evolución del sistema penitenciario español. Durante este siglo, las prisiones se convirtieron en medios intimidatorios, ya que, aunque desaparece la tortura y el tormento, las cárceles siguen manteniendo el carácter intimidatorio que las caracterizaba para poder seguir ejerciendo poder sobre la conducta de los presos. En resumen, los distintos sistemas y la legislación penitenciarios durante este siglo se caracterizan por el continuo progreso y cambio hacia unos sistemas más humanitarios, más

proporcionados entre delitos y penas, por ser un siglo de garantías procesales, independencia judicial y la consagración de la pena de prisión como sanción básica de todos los sistemas penales (López Melero, 2012)

Sin embargo, también durante el siglo XIX, el desarrollo del capitalismo y la consolidación de la burguesía supuso un aumento de la brecha de desigualdad económica y, por tanto, una clara división entre burguesía y proletariado. En otras palabras, aumentó la pobreza y la miseria entre las clases más bajas, hubo un aumento de los barrios marginales, donde se concentraba la falta de ingresos suficientes para mantener una dieta equilibrada y una vivienda digna, se agravó el desempleo y una baja escolarización.

Para los criminalistas de este siglo el aumento de la criminalidad estaba ligado al aumento de la pobreza, ya que consideraban las circunstancias de marginalidad y miseria como generadoras de sentimientos de desesperación y necesidades que las conducían a cometer delitos. Por tanto, durante este siglo se vinculó la criminalidad al perfil de persona con bajos recursos económicos, provocando una mayor desconfianza e inseguridad de la población hacia colectivos con bajos recursos económicos. Cabe destacar que la sociedad del siglo XIX era una sociedad con una marcada ideología individualista, la cual viene a decir que, como sujetos libres y racionales, somos responsables y con capacidad de elegir, y que, por tanto, nuestras acciones nos definen como personas. En otras palabras, no hay justificación alguna al delito.

Así los estudios realizados por los criminalistas de este siglo no sirvieron para que los gobiernos actuaran para disminuir esa pobreza, sino que, todo lo contrario, el pensamiento individualista de estas sociedades dio como resultado que durante este siglo hubiera una mayor criminalización de la pobreza. Tampoco desde el aspecto penal se tienen en consideración las circunstancias personales de los que cometen crímenes, sino que se basan en los hechos cometidos. Los sujetos, al gozar de esta libertad de cometer o no un delito, y de tener “moral” o no tenerla, si se los hallaba culpables, recae sobre ellos todo el peso de la ley.

A finales del siglo XIX, se produce un estancamiento y una crisis del sistema penal, puesto que no encuentran alternativas válidas para el funcionamiento de estos. La criminología propone una alternativa en base a los estudios que se habían estado haciendo hasta entonces: la transformación de los centros penitenciarios en establecimientos terapéuticos y rehabilitadores de los internos, mediante la terapia educacional, el orden, la racionalidad y el autocontrol (de la Cuesta Arzamendi, 1993) Así, durante el siglo XX, en España, se vislumbran nuevos cambios en el sistema penal. Se deja de lado poco a poco su carácter reformador y se va transformando en un sistema de carácter rehabilitador y de tratamiento, como así se indica en el Real Decreto sobre “el régimen de tutela y tratamiento corrección de los penados” del 22 de abril de 1903, en su artículo 2

(...) para hacer efectivo el cumplimiento de esta función social, se imponen las siguientes reglas: 1º que la acción tutelar sea constante. 2º que sea ejercida individualmente en cada penado. 3º que obedezca a las indicaciones derivadas del conocimiento

de los antecedentes y estado actual del penado, y que se encamine a reintegrarlo socialmente. 4º que se aplique conforme a un procedimiento gradual, en orden restrictivo y expansivo.

Además, se aprueba también en el Real Decreto de 5 de mayo de 1913, en el cual se promulga el primer código penitenciario español a la vez que la Ley de Libertad Condicional de 1914. Es, sin embargo, en el Código Penal español de 1944 en su artículo 84 donde se refiere al sistema progresivo, siendo desarrollado en el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956 donde si los divide en régimen cerrado, ordinario, abierto y libertad condicional (López Melero, 2012)

De esta forma, las diferentes reformas de los decretos, al igual que la aprobación de nuevas leyes van a tomar una perspectiva de rehabilitación y control de los centros penitenciarios, por lo que se crean organismos como la Central de Observación Penitencia en 1967, el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias en 1970 y decretos que trataban los temas de derechos y garantías de los reclusos, permisos de salida, las visitas y la supresión de castigos. Sin embargo, estas reformas no dieron buen resultado, por la falta de medios materiales, económicos, personales y, sobre todo, por la actitud rebelde de los presos (López Melero, 2012)

Finalmente, a finales del siglo XX en la Constitución de 1978 se hace referencia al sistema penitenciario aclarando que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los condenados, además de disfrutar de los mismos derechos fundamentales, al acceso de los beneficios de la Seguridad Social, así como a la cultura, y al desarrollo integral de su personalidad. Además, se aprueba la Ley General Penitenciaria cuyos rasgos a destacar son los siguientes:

– Consagración del principio de legalidad. – Establece el estatuto jurídico de los presos. – Regula las funciones de la Administración penitenciaria. – Potencia el régimen abierto y reduce el cerrado a supuestos extraordinarios (art. 10 LOGP). – Implantación del Juez de Vigilancia, como órgano que ampara los derechos de los presos, entre otras materias. – Se da importancia a la asistencia social tanto penitenciaria como postpenitenciaria. – Se atribuye un papel importante a la sociedad como factor necesario para la reeducación y reinserción social de los presos (López Melero, 2012)

Las instituciones penitenciarias son consideradas como males necesarios. Por lo tanto, el cierre de la cárcel sigue sin ser una opción viable, pese a los efectos negativos que produce y a pesar de la reconversión de estos en centros re-educativos y centrados en la rehabilitación. Justamente, por estos efectos negativos, actualmente, muchos ordenamientos jurídicos han comenzado a introducir alternativas de sanciones, como por ejemplo los arrestos de fin de semana, las multas, los trabajos en beneficio de la comunidad, etc. No obstante, ésta no es la única razón para que se hayan producido estas alternativas, ya que estas medidas están sobre todo influidas por el hacinamiento y superpoblación de las cárceles.

Las finalidades resocializadoras y rehabilitadoras que adquirieron durante el siglo XIX las cárceles y los sistemas penitenciarios, se mantuvieron y se mantienen, gracias a la consolidación de los Sistemas de Bienestar en Europa. El Estado de Bienestar en España, preocupado por el discurso de asegurar a los individuos el bienestar material, físico, económico y social, se dedica a intentar desentrañar las causas del delito. Destina un mayor presupuesto para el estudio del delito, su análisis y su superación a través del tratamiento científico médico y social más adecuado (de la Cuesta Arzamendi, 1993)

No obstante, las cárceles y los sistemas penitenciarios no dejan de evolucionar al compás de las transformaciones sociales y políticas de cada país. Sin embargo, es importante reseñar que parecen que todas van hacia una misma dirección: considerar como opción principal la rehabilitación antes que la pena privativa de libertad, pese a que no estén muy claras de donde vienen estas motivaciones. Sea como fuere, es positivo que se vislumbre un futuro con menos personas condenadas a penas privativas de libertad, puesto que esto reducirá la necesidad de crear más instituciones penitenciarias, y por tanto que haya un acercamiento a una realidad cada vez menos utópica: la de una sociedad sin cárceles que funcionen como tal.

5. Influencias de la ideología neoliberal: Sistema penal fuerte y un Estado de Bienestar débil.

El neoliberalismo es una corriente ideológica social y económica, cuyas bases podemos encontrar en F. Hayek y M. Friedman.

En Hayek³, por ser el teórico que defendió una sociedad liberal que tiene como argumento central (Hayek, 2001, p.182) que una sociedad debe ser creada bajo un orden espontáneo, constituido por reglas no escritas de conducta justa que permitan la libertad de los individuos, pero que a la vez funcione para proteger a los individuos en sus esferas privadas, y una organización u ordenamiento que concrete mandatos que aseguren esta libertad, en este caso hablaríamos del Estado, cuyas actividades coercitivas deben limitarse a mantener el cumplimiento de dichas reglas y que administre, a su vez, los recursos puestos a su disposición.

En M. Friedman, un economista de libre mercado, y propulsor de la teoría y prácticas económicas llamadas monetarismo, que defienden el control de la oferta monetaria (del dinero en efectivo) para crear una mayor producción a corto plazo, e inflación a largo plazo (Nicole Roldán), y cuya teoría fue utilizada para levantar las economías de las sociedades capitalistas tras la Gran depresión (1929), defendía el libre mercado, la regulación natural de este y apostaba por un Estado regularizador, una especie de árbitro que vigile el cumplimiento de leyes y que “contrarreste los monopolios naturales e intervenga cuando lo requieran las externalidades y apoye la caridad privada y la familia en la protección del irresponsable (demente o niño)” (Friedman, 1999).

La base ideológica del neoliberalismo es esta, a grandes rasgos. Los periodos liberales en la historia han tenido sus años de gloria y sus años de oscuridad. Así, en España y Europa, el sistema absolutista fue abolido por el sistema liberal. En el Estado liberal se reivindican los derechos naturales del hombre, como son libertad, igualdad y propiedad; sin embargo, se hizo legal el monopolio de ciertos individuos del uso de la fuerza para garantizar la seguridad y los derechos de los individuos y se asignó, también, la función por parte del Estado de vigilar las relaciones laborales y mercantiles sin obstaculizar la buena marcha del comercio y de la industria (Huerta moreno, 2005). Otro de los periodos donde triunfa el sistema liberal es tras la Gran Depresión (1929), donde la mayor parte de los gobiernos buscaban soluciones a la decadencia económica y social en la que se encontraban y las encontraron en este.

Así pues, los gobiernos europeos encontraron en las medidas propuestas por los liberales la solución para la salida a la crisis de los años treinta. Una de las medidas propuestas por el liberalismo fue la de una mayor intervención del Estado en los ámbitos sociales y económicos que se tradujo en un aumento del gasto

³ Friedrich August von Hayek fue un filósofo, jurista y economista austriaco.

público y el incremento de inversiones que hicieron que, a su vez, se produjera una mejora en la renta. Estas mejoras afectaron positivamente a la disminución de la brecha existente entre los ingresos de las elites y de las masas populares. Así, desde el punto de vista social, la intervención del Estado había dado soluciones efectivas por lo que el Estado intervencionista se ganó la simpatía de todos. Sin embargo, las nuevas medidas introducidas por los gobiernos liberales que apoyan la intervención del Estado también son para crear necesidades a los ciudadanos y así, que sean mayores los niveles de producción y los beneficios económicos.

Estas relaciones entre gobierno y sociedad facilitaron la creación de los Sistemas de Bienestar, los cuales defienden que todos los ciudadanos deben tener al menos una vivienda digna, empleo, atención médica universal y gratuita, una educación pública y las pensiones para las personas mayores tienen que darse desde el Estado. La complejidad de la formación de los Estados de Bienestar es tal que en el presente trabajo sólo se hará dicha mención de forma superficial porque no es lo que le atañe explicar. Actualmente, son pocos los Estados con un Sistema de Bienestar que cumpla con los objetivos marcados en un principio. Cada país fue incorporándolo dependiendo del contexto histórico, político y social en el que se encontraba de forma que adopta diferentes medidas y perspectivas conforme cambia el contexto social en el que se encuentra. En el caso de países como España, Italia, Grecia o Portugal, la adopción del Estado de Bienestar es más tardío que en los demás países europeos. Particularmente España no entra en la actualmente llamada Unión Europea⁴ hasta que la dictadura acaba y no se inicia la transición democrática.

A pesar de la prosperidad económica con el sistema liberal, a finales de la década de 1970, la expansión económica generada durante los últimos años se empezaba a resentir. Las crisis cíclicas del sistema capitalista afectaron la estabilidad económica de los países desarrollados provocando pánico e incertidumbre en las finanzas internacionales. Así, durante este periodo de recesión económica el hijo del liberalismo, el neoliberalismo, ganó terreno gracias a sus fórmulas basadas en restricciones económicas y austeridad financiera. El sistema neoliberal:

Afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres, y libertad de comercio. El papel del estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de éstas prácticas(..) igualmente debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados(..) y en aquellas áreas en las que no existe mercado(como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación medioambiental), éste debe ser creado cuando sea necesario mediante la acción estatal. Pero el Estado no debe aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas(..) (Harvey, 2007, pág. 6)

⁴ A partir de ahora UE

A principios del siglo XXI, estalló nuevamente una crisis financiera que afectó a todas las economías europeas, y, por supuesto, a España también. En 2008, la llamada “burbuja inmobiliaria” explotó en España. La crisis económica que se vislumbró a partir de este año volvió a dejar paso a ideologías más o menos olvidadas en el marco político y económico tanto español como europeo. La crisis de 2008 que afectó a todos los países de la UE provocó una gran recesión económica y tuvo como consecuencia la caída en picado del empleo, el aumento del paro, el cierre de empresas y familias sin recursos económicos suficientes para hacer frente a hipotecas, facturas y demás gastos.

Las medidas neoliberales prometían una mejoría económica temprana mediante medidas como la desregulación del mercado, una mayor privatización de servicios públicos y el abandono o los recortes en los presupuestos del Estado de algunas áreas de provisión social. Estas medidas unidas a las altas tasas de desempleo empujaron a muchas familias a la carencia de recursos económicos y materiales. El aumento de situaciones de pobreza y exclusión son consecuencia no solo de la llegada de una crisis económica, sino también una evidencia de que algo no estaba funcionando, puesto que la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social en España era porcentualmente mayor en relación con los países de la UE antes de la crisis económica, como más adelante veremos.

Pero ¿qué tiene que ver esto con el establecimiento de un sistema penal fuerte en España?

Bien, pues es que desde principios del siglo XX se ha venido dando desde el discurso político una alarma excesiva sobre delincuencia en España y, en general, en los países de la UE. Esto unido a que

(...) la investigación criminológica tiene muy poca relevancia en la política criminal. Por ejemplo, a pesar de que los delitos no han aumentado de manera ostensible en los últimos años, ha habido una tendencia notable a endurecer las penas, y ello a pesar de que un estudio publicado en el año 2001 revelara que los sujetos que cumplían condenas más largas no reincidían menos que los que estaban sirviendo condenas menos severas; más bien ocurría lo contrario. Pero la visión planteada en los medios de comunicación es, contrariamente, la de un país sacudido por una ola de crímenes, que precisa de medidas urgentes y expeditivas (Garrido Genovés, 2010, p.380)

Los criminalistas y estudiosos del derecho penal cuestionan las cifras oficiales sobre el número de delitos cometidos, y por tanto dudan de los porcentajes de delincuencia ofrecidos desde el gobierno. No tanto porque la información esté manipulada o sea falsa, sino porque la medición de la delincuencia es tan compleja que necesita ser medida con una rigurosidad que no se está dando. En primer lugar, hay muchos factores que inciden en el aumento de las cifras de delincuencia, entre ellos están: 1) el delito tiene que ser conocido por las autoridades, por lo que la actuación policial, la calidad de la investigación y la preparación de los policías va a ser determinante para que se den a conocer. Por ejemplo, el desmantelamiento de una red de droga requiere de una investigación elaborada; 2) El delito tiene que ser denunciado. Desde las autoridades españolas y medios de comunicación se ha trasladado desde principios del 2000 la importancia

de denunciar, además de contar con más medios como números de teléfono, a través de internet, etc.; 3) Las prácticas y actuaciones policiales pueden influir en el ascenso o deceso de la delincuencia. Por ejemplo, el “Plan 2000” pudo influir a un aumento de los casos de delitos, puesto que se daba bonificaciones a aquellos agentes que ayudasen a reducir la delincuencia de determinadas zonas; 4) El número de personas encarceladas no indica una relación directa con el nivel de delito, puesto que

este es resultado de una serie de complejos procesos de decisión en toda una diversidad de ámbitos. Entre ellos se encuentran: las decisiones sobre qué actos constituyen delito en el código penal; las condenas que se les imponen; las presiones sociales o políticas para perseguir con más recursos ciertos delitos(...) (Wagman , 2002)

Por tanto, ceñirse únicamente al número de delitos cometidos o al número de presos como indicadores probatorios de la existencia del aumento o disminución de la delincuencia es tan incierto como irresponsable. Por desgracia, los actuales métodos de medición de la delincuencia siguen siendo ineficaces, ya que la información de los diferentes organismos encargados de realizar estos estudios ofrece cifras dispares y cada partido político interpreta estos datos a favor de su propio discurso. Parece, por tanto, que en la nueva realidad social que nos ocupa, en Europa se dan tres circunstancias comunes:

En primer lugar, una estabilización de la delincuencia o incluso un decremento en muchos países con respecto a años anteriores; en segundo lugar, la existencia de una opinión pública que, a pesar de ello, perciben que el crimen ha aumentado, y finalmente la respuesta del Estado en forma de un aumento en el uso de las penas de prisión y en la severidad de las condenas (Garrido Genovés, 2010, pp. 380-381)

Así, la llegada de la crisis en 2008 con la explosión de la burbuja inmobiliaria, la aplicación de políticas neoliberales y el contexto de fingida inseguridad social que se venía dando desde principios de siglo fueron determinantes para despojar a algunos colectivos a espacios de segregación social y el aumento del miedo social a ciertos colectivos por las tasas de delincuencia crecientes. Además, se vislumbró la debilidad del sistema de bienestar español puesto que no pudo dar respuesta a las necesidades sociales que se dieron, como el empobrecimiento de los hogares como consecuencia del fuerte desempleo.

En conclusión, la crisis económica, el endurecimiento de las leyes por una sensación de inseguridad social creciente y el auge de las políticas neoliberales crearon las condiciones perfectas para el aumento de la pobreza y la exclusión social.

5.1 La exclusión social y la pobreza como daño colateral del débil Estado de Bienestar Español.

En España la llegada de la crisis económica y financiera puso de manifiesto lo débil que se encontraba el Sistema de bienestar instaurado desde principios del siglo XXI puesto que desde ese entonces se empezaban a dar nuevos cambios dentro de las sociedades occidentales y, lo que antes funcionaba, ahora ya no lo hace. Estos cambios que son el envejecimiento de la población, la llegada de inmigrantes, el cambio dentro del núcleo familiar, una mayor precariedad laboral, entre otras, provocaron otro tipo de problemas sociales y económicos que no se estaban valorando y por lo tanto las consecuencias que se dieron para la sociedad a partir de la recesión económica fueron aún más graves. Además, es importantísimo tener en cuenta que en nuestro país se construyó todo el sistema garantizador de derechos sociales en relación con los asalariados, por tanto, no se puede acceder a estos servicios si no tienes condición de asalariado, o al menos, no de la misma forma.

Como se sabe el mercado laboral fue el más castigado en esta crisis dejando a muchas familias con uno o ningún sueldo, alcanzando niveles de paro nunca vistos y con empleos más precarios e inestables. Según datos del INE⁵ mientras en años anteriores al 2008⁶ el paro no había superado el 9%, en este año llegó al 12.96 %, subiendo en casi un 3 %. En los años posteriores, la tasa del número de parados no dejó de aumentar. La tasa de paro más alta registrada en los últimos años fue en 2013 cuando alcanzó el 25.04 %. Actualmente, el último trimestre del 2019, la tasa del paro alcanzó el 13.78 %, tasa aún más alta que en 2008.

Desde una perspectiva social, el desempleo masivo y las políticas neoliberales desestabilizaron la red de servicios básicos. Como bien analiza Pedro José Cabrera Cabrera (2001) en su artículo *Cárcel y exclusión* la crisis del 2008 en España se tradujo en una reducción de los niveles de protección social y en un aumento de la exclusión social porque el sistema de protección social que se instauró en España se basó en las relaciones laborales y, por tanto, el estancamiento y recesión en el mercado laboral tuvo un impacto directo en la disminución de los derechos social que se tradujo en una disminución de la capacidad de abarcar los problemas sociales que se auguraban. Las políticas neoliberales que se aplicaron endurecieron los recortes en servicios públicos, debilitando aún más el llamado Estado de bienestar.

Igual que han ido cambiando las distintas realidades sociales, ha cambiado la definición de pobreza y de exclusión social.

Por un lado, el concepto de pobreza habitualmente se lo ha relacionado con la falta de recursos económicos. La pobreza goza de gran dinamismo, pese a estar condicionada mayoritariamente por el mercado de trabajo y la precariedad laboral. Pese a ser un fenómeno complejo del cual existen numerosas

⁵ INE (Instituto Nacional de Estadística)

⁶ Anexo: Tabla 1. Paro en España durante los años 2002 y 2019 (los datos seleccionados corresponden al último trimestre de cada año) <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4247>

definiciones, interpretaciones y maneras de medirlo, las más recurrentes a la hora de tratar la pobreza son los conceptos de pobreza absoluta y pobreza relativa.

La pobreza absoluta es aquella situación en la que las necesidades básicas de las personas no están siendo cubiertas. Y es una medición que se aplica a todos los individuos independientemente de la sociedad en la que se encuentren.

La pobreza relativa, como su nombre indica, es aquella que mide el nivel de pobreza de una sociedad, y por tanto se va a considerar pobre a una persona cuya situación sea de desventaja económica y social frente a los individuos de su entorno; cabe destacar que este concepto está relacionado con el de desigualdad. La OCDE y Eurostat utilizan en sus mediciones el concepto de pobreza monetaria relativa, por lo que va a ser la perspectiva desde la cual se va a analizar la pobreza en España. El criterio que se sigue es que se consideran pobres o en riesgo de pobreza a aquellos que se encuentran con una renta por debajo del 60% de la mediana de renta nacional.

Por otro lado, la exclusión social es un concepto que abarca más variables que la de carencia económica como lo hace la pobreza. La exclusión social es “el resultado de un proceso creciente de conexión, de pérdida de vínculos personales y sociales” (Martínez-López & Sánchez Carbonell, 2019, p.303) siendo una dificultad para los individuos acceder a las oportunidades y recursos existentes. Además, el avance de las sociedades está provocando que haya más colectivos en situaciones de vulnerabilidad y desigualdad. Para medir la exclusión social se necesitan más variables que la renta y en este caso las agrupamos en dos: personas que sufren privación material severa (4 de los 9 ítems de los que consta como no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, comida de carne, pollo o pescado, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, etc.) y/ o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja (por debajo del 20% del total)

En España antes de la crisis económica el umbral de pobreza y exclusión social era demasiado alto en comparación con los demás países europeos, pero con la crisis económica incrementa aún más. Así, en 2008⁷ el riesgo de pobreza era del 23.8 y ha ido incrementando hasta el año 2015. A partir de este año comienza a descender, pero lo hace muy lentamente llegando en 2018 al 26.1%.

Las consecuencias de la crisis económica no fueron igual para todos los españoles. Se hablaba anteriormente del aumento del paro, del umbral de pobreza y/o exclusión social, pero sin hacer referencia a cuáles han sido los sectores económicos más afectados. Por ejemplo, la tasa o el número de personas en paro registradas por el INE sólo nos indica el número total de personas en paro, por lo que se debe ir más

⁷ Véase en ANEXO: Tabla **¡Error! solo el documento principal..** Tasa de pobreza y/o exclusión social en España

allá, y se debe analizar y tener en cuenta a qué sectores de la economía y a qué grupo de edad afectó en mayor grado, para así poder entender que la crisis no supuso lo mismo para toda la población española y que las consecuencias para unos no fueron las mismas que para otros, abriendo paso a una creciente desigualdad.

En el 2007, según el INE, las tasas de paro por sector del nivel de formación alcanzado eran mayores en los sectores con menor nivel de formación alcanzado, como es el caso del sector Servicios (10.27 %), el sector de formación básica y desarrollo personal (9.91 %), y el sector de la Agricultura (8.34 %). Cabe señalar que el sector de la Mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria manufacturera y construcción se mantenía en un 4.18 %, con la tasa más baja de desempleo, debido a la burbuja inmobiliaria que estaba por estallar en el próximo año. Evidentemente, en la mayoría de los sectores hay una subida de la tasa de desempleo tras la crisis. Sin embargo, mientras en los sectores con niveles de formación mayor la subida es del 3 o 4%, en aquellos donde hay un nivel de formación menor la subida es del 8% al 12%.

Por otro lado, si también se analiza las tasas de paro por nacionalidad, se encuentran datos que muestran como la población extranjera no comunitaria durante estos años presenta las tasas más altas de desempleo⁸.

Según estos datos, la crisis afectó sobre todo a aquellas personas con empleos de un nivel de cualificación bajo y a los extranjeros no comunitarios que residían en España, sin embargo, la edad o el género también pueden ser dos variables que condicionen el modo o el nivel de afección de los efectos negativos de la crisis, de ahí que en ocasiones se hable de la feminización de la pobreza o de la preocupante cifra de jóvenes envueltos en estas situaciones. No obstante, a pesar de que sería interesante analizar estos datos, no se va a hacer en el presente trabajo por falta de espacio y tiempo. Por su parte, el gobierno optó por tomar medidas de austeridad, recortando así presupuesto en sanidad, educación, pensiones, vivienda y ayudas públicas, recortaron subsidios de desempleo, encarecimiento de los productos de alimentación e higiene básicos, precipitando así a familias al borde de la exclusión y la pobreza y a otras a colocarlas en este límite.

No es casualidad observar cómo la crisis en el mercado laboral afecta directamente a los individuos y los lleva a situaciones de carencia material y de derechos puesto que nuestro Sistema de bienestar, como se enuncia al principio de este apartado, se crea en base a la condición salarial de los individuos. El mercado laboral siempre cambia a favor del capitalismo cuya única ley de oro es la de un aumento sostenido de ganancias y la acumulación de beneficios. Alain Lipietz (1997) en *El mundo del postfordismo* explica como la crisis salarial fordista, que era el nombre que recibía la relación salarial dominante de la postguerra, engendra

⁸ Véase ANEXO: Tabla **¡Error! solo el documento principal..** Porcentaje de parados en España, según la nacionalidad

múltiples evoluciones en los países desarrollados. La flexibilización del contrato salarial fue la primera idea considerada válida para la salida de esta crisis fordista, sin embargo, otra de las salidas que algunos de los países europeos más industrializados encontraron fue la movilización de los recursos humanos, es decir, la descentralización de las empresas las cuales llevan la producción a países con una mano de obra más barata. Es importante señalar que la función del sistema laboral en el sistema postfordista es residual en cuanto a que empuja al desempleo masivo de los individuos.

Actualmente, España, se encuentra en un postfordismo residual que Lipietz lo explica como un sistema donde no se optó por la innovación, sino que se apostó por una flexibilización laboral salvaje y con salarios más débiles. Por eso, pese a que Europa sea un continente líder en el mercado mundial de riqueza y población, es también el único polo capitalista desarrollado que sigue manteniendo una tasa de desempleo alta; por supuesto no ocurre así en todos los países europeos como testimonian los países escandinavos y “El Arco Alpino” (Alemania del sur, Austria, Italia del norte y Suiza) donde la innovación técnica y social sí que tuvo lugar. De esta manera se explica por qué España pese a los años de crecimiento económico del siglo XXI seguía teniendo una tasa de paro superior a la de los países miembros y una elevada tasa de pobreza y/ exclusión social elevada.

El establecimiento del sistema postfordista, tal y como se instauró en España, además de dar explicación a la precariedad laboral actual, explica también cómo utiliza al sistema laboral y al sistema penal como residual en tanto en cuanto expulsa a los individuos a un lado o al otro cuando no le es útil al sistema, es decir, apartando en el paro o en la cárcel a aquellos individuos indeseables para el sistema. Por esto, como se explicará en el segundo apartado, es imposible separar la relación entre el mercado laboral y el sistema penal actual puesto que es una de las cuestiones claves para explicar cómo los individuos pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión y/o pobreza serán estigmatizados por la sociedad y cómo serán tildados de delincuentes y peligrosos.

6. La criminalización de la marginalidad

La criminalización de la marginalidad en España se explica debido a tres factores: el imaginario social basado en la creencia de que a mayor desempleo, mayor delincuencia y población carcelaria, al Estado encargado de escenificar inseguridad ciudadana y a la función residual de la cárcel en el sistema postfordista actual.

Al hablar de un imaginario social basado en la creencia de que a mayor desempleo, mayor delincuencia y población carcelaria, nos referimos a que existe un pensamiento común que cree que el aumento del desempleo se traduce necesariamente en un aumento de la delincuencia generada por aquellos que se encuentran en situaciones de pobreza y/o exclusión social y que por tanto aumenta la criminalidad y la población en las cárceles.

Por un lado, hay que desmentir la existencia de una sociedad punitiva y con miedo al delito. La visión que tiene la sociedad sobre la delincuencia está sesgada tanto por la tendencia del Estado de mostrar una preocupación por la delincuencia como por los medios de comunicación que respaldan esta imagen. Sin embargo, lejos de la percepción global que se tiene de ser una sociedad punitiva y con miedo al delito, diferentes estudios han matizado estas afirmaciones y han sacado diferentes conclusiones.

Sobre el miedo de los ciudadanos al delito:

tomando los datos del British Crime Survey del periodo 2003-2004, los resultados eran bien diferentes a los tradicionales. Por ejemplo, la respuesta a la pregunta tradicional de ¿«Cuanto miedo tiene usted de ser robado?» fue de un 35% juntando los segmentos «mucho» y «bastante». Sin embargo, cuando la pregunta fue «¿Cuántas veces tuvo miedo de ser robado el año pasado?», el 84,5% confesó que ninguna, y sólo un 10% de la muestra encuestada temió serlo más de cuatro veces el año anterior(...) En resumen, lo que tenemos es una nueva perspectiva con respecto al miedo al delito: de un 35% que parece temer mucho ser víctima de robo, pasamos a un 8%. (...) Por consiguiente, lo que contestan los ciudadanos cuando son interrogados en el modo tradicional no es tanto la experiencia emocional actual frente a una posible amenaza criminal, sino más bien una expectativa construida sobre lo que ellos perciben que pueden sentir en un futuro incierto, lo cual es muy diferente de lo que generalmente entendemos como «miedo al delito» (Garrido Genovés, 2010, pp. 382-383)

Sobre la percepción de los ciudadanos de la justicia:

aunque el conocimiento que los ciudadanos tienen del funcionamiento del sistema penal es bastante precario, lo que está claro es que tienden sistemáticamente a creer que vivimos en un periodo de aumento constante de la delincuencia (“problematización” del fenómeno), y que el sistema penal, y en particular los jueces, no reaccionan con firmeza ante esta situación. Existe así una creencia extendida en la benevolencia del sistema hacia el delincuente, al creer que las penas son mucho más blandas de las aplicadas realmente y que no se cumplen ni mucho menos en su totalidad. (Varona, 2008)

Sobre la creencia de que la sociedad española es punitiva, como se muestra en el estudio de Daniel Varona, cuando se pregunta acerca de la preferencia de la cárcel o de otros sistemas de castigo, la gran mayoría optan por penas alternativas a la prisión permanente, sobre todo por soluciones que conlleven a la rehabilitación. Daniel Varona aporta como una de las conclusiones de este estudio que estas respuestas muestran el desconocimiento de la imposición y aplicación de las penas puesto que, pese a que se prefiere una respuesta no punitiva a la hora de castigar ciertos delitos, se sigue manteniendo la idea de que la justicia es benevolente, aunque la realidad es que la justicia castiga con penas de cárcel aquellos delitos que en general creen que debe haber otro tipo de pena.

Por consiguiente, parece que la sociedad no exige con tanta intensidad y unanimidad el castigo de los delincuentes como respuesta esencial del Estado. Más bien coexisten dos actitudes que no son incompatibles: por una parte los ciudadanos europeos entienden que la dureza penal ha de ser acorde con la gravedad de los hechos, y que los autores de los crímenes han de pagar por ello. Pero por otra parte también creen que ese castigo no ha de incluir necesariamente una respuesta que esté ajena a la rehabilitación de los delincuentes, particularmente si son juveniles, así como que, a la larga, la prevención es mucho más eficaz que la aplicación de las condenas cuando el sujeto se ha convertido ya en un delincuente reincidente (Garrido Genovés, 2010)

Por otra parte, este imaginario del que hablamos basado en el mito de que la pobreza y/o exclusión social está directamente relacionada con la delincuencia ha podido estar justificado en ciertos periodos de la historia, como cuando la delincuencia y la población carcelaria eran inversamente proporcionales al desempleo, es decir, cuánta mayor delincuencia había era cuando las tasas de desempleo eran menores. Sin embargo, esto es así si nos remontamos al siglo XVII cuando la delincuencia estaba vinculada a los pobres y la cárcel era en realidad casas de trabajo en donde se encerraban a los “pobres ociosos” para que de ser una carga pesada se convirtieran en fuerza productiva (Olver Gómez, 2006).

Actualmente, numeros estudios e investigaciones rechazan que las altas tasas de pobreza y/o exclusión social guarden relación directa con las “altas tasas” de delincuencia. En primer lugar, se ha puesto en duda los datos oficiales del Ministerio de Interior, EUROSTAT, o del INE puesto que el estudio de la criminalidad es muy complejo y aún no se han desarrollado herramientas lo suficientemente adecuadas para hacer un análisis meticuloso de ellas. Pese a esto, se sigue recurriendo a ellas por ser la única información estadística oficial existente, y aún así los datos siguen sin corroborar estas afirmaciones, puesto que en los años posteriores a la explosión de la burbuja inmobiliaria que produjo la primera gran recesión económica del siglo XXI en España, y que se traduce en un aumento del paro y por tanto de la pobreza y/o exclusión, los datos que hay del periodo del 2010 al 2018 es que ha habido un descenso de la tasa de encarcelación y una estabilización en la duración del encarcelamiento (Cid, 2020)

En segundo lugar, ttro de los motivos por los que no se pueden analizar los datos de criminalidad de manera aislada es que el aumento de la criminalidad está condicionado a otros factores, como a la

criminalización de nuevos delitos, a la europeización y al rigorismo. Como es bien sabido, para medir la criminalidad hay que evaluar los delitos cometidos, el porcentaje de nuevos ingresos en prisión y la duración de la encarcelación. Siguiendo el análisis que hace José Cid(2020) en el artículo *Futuro de la prisión en España* la criminalización de nuevos delitos como los de violencia de género y delitos contra la seguridad de tráfico elevan el porcentaje de encarcelamiento y la duración de este durante los años 2000 al 2009; la europeización que se refiere al proceso de integración de la política criminal europea por parte de España cuyas influencias son

la creación de un nuevo sistema de penas alternativas a la prisión y su implementación por parte de jueces y tribunales y la reducción del uso de la prisión preventiva por parte de la judicatura a partir de la jurisprudencia del tribunal constitucional (Cid, 2020, p.23)

Además, también se intenta desde Europa marcar una tendencia menos severa de la penalidad, que no caló de la misma manera en España, ya que esta se ha caracterizado por el aumento en la severidad de las penas y la duración del encarcelamiento; y por último el rigorismo tanto por la legislación de nuevos delitos como por el uso restrictivo de la libertad condicional por parte de la instituciones penitenciarias.

Así, pese a que los datos demuestren que hay una elevado rigorismo, aunque la criminalidad no se haya elevado, que hay un estancamiento en la duración del encarcelamiento, aunque sigue siendo más elevada que la media europea y que hay un descenso del encarcelamiento, sigue habiendo desde el gobierno una tendencia alarmista sobre la delincuencia que, parafraseando a Daniel Jiménez Franco, ha consistido en escenificar una inseguridad vial basada en la explotación de percepciones estereotipadas como por ejemplo el ideal de extranjero pobre en un momento de gran flujo migratorio.

Por tanto, es falso cuando se afirma que, durante los años posteriores a la explotación de la burbuja inmobiliaria pese a las altas tasas de desempleo y de pobreza y/o exclusión social, haya podido haber una relación directa con el aumento de la criminalidad que durante esos años se dijo que existía porque ese aumento no solo no se había producido, sino que incluso hubo una estabilización en el tiempo de estancia de la prisión y un descenso de los ingresos en prisión. Es más, es en el periodo de 2000-2008 cuando la población penitenciaria se incrementó en un 58.4%, momento de auge económico, se explica debido a la maduración del Código Penal de 1995 y a la crisis penal de los inmigrantes los cuales suponen

un nuevo grupo de riesgo que atrae la atención penitenciaria de los órganos de persecución criminal, elevando las tasas de descubrimiento y sanción de los delitos(...) acreditada por las estadísticas que evidencian que el 61.6% del crecimiento de las población penitenciaria española entre 2000-2006 corresponde a reclusos de nacionalidad extranjera (Brandiz, 2009, p.36)

De esta forma, cuando en los estudios criminológicos sostienen que “las personas que viven en una situación de pobreza, marginalidad y desigualdad están más expuestas a desarrollar conductas delictivas” (Tarancón Gómez, García Rivas, & Amira de la Garza, 2016, p.679) debido a diferentes factores como son la

falta de recursos económicos y la desigualdad social, no está reduciendo cómo únicas salidas de estos la delincuencia, sino que es un hecho objetivo avalado por multitud de estudios que así lo demuestran, al igual que existen otra serie de investigaciones que analizan la criminalidad en otro tipo de colectivos, y de los cuales no se han creado una serie de estereotipos y estigmas como si se ha hecho con poblaciones en riesgo de pobreza y/o exclusión. En otras palabras, no hay ningún estudio que avale una subida sin precedentes de la criminalidad en un contexto de empobrecimiento de la sociedad en sí.

Sin embargo, la manera de abordar estos problemas sociales tiene una repercusión directa sobre el aumento de las tasas de criminalidad en estos colectivos, ya que siguiendo lo que plantea el sociólogo Loïc Wacquant, el sistema neoliberal instaurado a finales del siglo XX plantea tres estrategias para tratar la marginalidad: socializar el empleo, la medicalización de los pobres y la penalización de estos (Lutz, 2013). La primera, socializar el empleo, se refiere a que el Estado adopta una serie de políticas asistencialistas con el objetivo de reducir el desempleo, sin que esto suponga una mejora en la calidad de vida, y, a su vez, reducir la visibilización de las diferencias de clase. El Estado, entonces, se torna asistencialista e implicado con las desigualdades de la sociedad. La segunda, la medicalización de los pobres, se refiere a cómo desde el Estado se trata a las poblaciones más vulnerables como enfermos activos o potenciales (alcohólicos, drogadictos, depresivos o locos) o como poblaciones con mayores posibilidades de sufrir patologías crónicas e infecciosas (sida, obesidad, diabetes, etc.). Por último, la penalización de conductas y hábitos de aquellos con menos recursos económicos:

funciona como una técnica para *la invisibilización* de los problemas sociales que el Estado, como palanca burocrática de la voluntad colectiva, ya no puede o no quiere tratar desde sus causas, y la cárcel actúa como un contenedor judicial donde se arrojan los desechos humanos de la sociedad de mercado (Lutz, 2013)

El carácter rehabilitador y de inserción social que se intentó implantar en España a finales de los años 70 tuvo el sentido en tanto en cuanto el sistema laboral y el mercado se encontraban estables, permitiendo un alcance de los derechos y los servicios sociales mayores, sin embargo, la recesión económica y otra serie de factores contribuyeron a la crisis del sistema capitalista fordista, que evolucionó a lo que se denomina como postfordismo, ya que se actualizan las nuevas formas de relación salarial, afectando de manera directa en los derechos sociales y en el rumbo del sistema penal y la cárcel, la cual para muchos optimistas se encontraba en sus últimos años.

Por tanto, asistimos a dos hechos que van a producir la criminalidad a los colectivos en riesgo de exclusión. Por un lado, la superación de la intervención penal desde la rehabilitación y la reinserción sobre las causas de la criminalidad acarrea algunas consecuencias que marcarán nuevas formas de control y la nueva funcionalidad de la cárcel, así, entre otras encontramos que (Brandiz, 2009, p.34): se sobreviene el relanzamiento de las lógicas de la penalidad intimidatorias y segregadoras, el control se proyecta de forma

intencionada sobre sujetos y grupos sociales considerados de riesgo, adoptando una lógica de redistribución más que de reducción que permite la existencia de segmentos sociales permanentemente marginalizados los cuales son cada vez objeto de menos políticas de inclusión y más de políticas de control excluyente, se produce también una creciente proyección de las dinámicas de control y castigo sobre la figura del migrante utilizando la sanción como segregativa o excluyente e incluso formas renovadas de disciplina sujetas a lógicas productivas, además se produce una progresiva proyección del espacio de control de las instituciones penitenciarias a todos los ámbitos sociales, lo que hace que se tienda a distribuir entre los ciudadanos y las diferentes agregaciones sociales las responsabilidades de seguridad y lucha contra la criminalidad produciendo así una falsa sensación de falta de severidad del Estado e una creciente sensación colectiva de inseguridad.

Por otro lado, el sistema postfordista, precarizó el sistema laboral debido a la nueva forma de organización en las relaciones laborales. Se introdujo la flexibilidad laboral que como explica María Candelaria González (2006) en *Flexibilización de las relaciones laborales. Una perspectiva teórica postfordista*, aunque para el sistema neoliberal flexibilizar el empleo significa eliminar las rigideces de la economía producidas por las políticas regulacionistas y proteccionistas del trabajador, no es así, puesto que mientras que la desregulación persigue la eliminación de las normas protectoras, la flexibilidad propone su revisión. No obstante, la dinámica que se siguió en España fue esta, produciendo así una precarización de los empleos que se tradujo en un aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones de vida de los individuos. Así, el sistema postfordista utiliza el mercado laboral y el penitencial como un vertedero donde expulsa la parte residual que no le sirve hacia una dirección u a otra mediante las nuevas formas de control social y las nuevas relaciones laborales.

6.2 La cárcel como un espacio de exclusión

La cárcel o, mejor dicho, las instituciones penitenciarias son aquellas en las que se hace posible las penas de privación de libertad. Se edificaron con el objetivo de ser utilizadas por el poder público “como forma de control y prevención de la delincuencia” (Cór12)

A pesar de que durante los años 70 con la entrada en vigor de la Constitución Española, en donde se proclama la reeducación y la reinserción social como las orientaciones fundamentales de las penas privativas de libertad esta lógica hallaba solidez en un periodo en el que la reforma social, junto con la prosperidad económica, reducen la frecuencia del delito, pronto deja de hacerlo ya que las realidades se tornan distintas a partir de la gran recesión económica. Sin embargo, pese a la evolución y el carácter rehabilitador que le han querido ir asignando, lo cierto es que

el sistema penitenciario sigue siendo el subsistema marginal y marginador que siempre fue (...) Como tal, es la respuesta de la sociedad antes unos fenómenos sociales que: “amenazan” el orden instituido. Por otra, es una respuesta que crea exclusión social, su efecto inmediato es la institucionalización de la marginación. Es decir, que no se trata de una actuación inclusiva sino segregativa y excluyente, la cual se orienta a la reproducción del orden social y el mantenimiento del statu quo (Marcuello- Servós & García- Martínez, 2011)

Por tanto, dentro de la cárcel coexisten dos elementos difícilmente conciliables: el punitivo, que se compone de control social y seguridad y el rehabilitativo, que aboga por la reeducación social del preso

Así, la crisis de la función de la prisión como rehabilitadora ha dado lugar a la hegemonía de orientaciones de carácter neoliberal con tendencias conservadoras del delito que entienden que la función de la prisión debe de ser neutralizadora en la medida que se incrementa la severidad del castigo para desincentivar el delito y se minimizan los costes del sistema penal en materia también de prevención puesto que se entiende que la rehabilitación es inútil. Es de esta forma, actualmente la cárcel es una institución cuya existencia nunca ha tambaleado. Por tanto, las funciones de la prisión se reducen a apartar o retener a una persona que se considera desviado o una carga social para inculcarle una serie de hábitos y comportamientos adaptados a lo que la sociedad necesita, es un medio diseñado para corregir comportamientos, retener a aquello de lo que no se puede extraer un beneficio para el sistema capitalista postfordista, y sirve también como palanca burocrática para no atender desde políticas sociales las situaciones de muchos de los individuos que se encuentran encerrados.

Pedro José Cabrera, siguiendo a César Manzanares (Cabrera Cabrera, 2002), nos muestra las cinco etapas por las cuales pasa un individual al entrar en la cárcel y que son claves para entender que lejos de ser un lugar de rehabilitación o de reinserción, es una máquina de exclusión.

Primero, la ruptura con el mundo exterior, tanto en lo que se refiere a estímulos físicos, visuales, auditivos, u olfativos como al alejamiento de las referencias personales, medios de comunicación y de valores presentes en el exterior lo que genera un fuerte sentimiento de debilidad y desamparo.

Segundo, la desadaptación social y desafiliación personal, puesto que mediante una compleja y variada sucesión de situaciones y momentos de ruptura con su yo se acaba con su personalidad y su individualidad convirtiéndose en un preso más. Entre otras formas de mutilación de su yo entran el aislamiento, la pérdida de intimidad, el contacto inevitable, las ceremonias desagradables, los registros nocturnos y el control del sueño y de la alimentación. De esta forma es normal la aparición de cuadros de trastornos de personalidad, ansiedad, estrés o depresión

Tercero, adaptación al medio carcelario que se produce como mecanismo de defensa. Así, hay una readaptación al nuevo contexto físico y relacional denominado como procesos de prisionalización a través del cual se integran y se reproducen comportamientos y actitudes de la subcultura carcelaria, en la cual las relaciones son de dominación, opresión y autoritarismo tanto entre los guardias como entre los mismo presos. Es una cultura en la que la violencia física y la coacción están muy presentes, produciendo actitudes de desconfianza y recelo indispensables para la supervivencia

Cuarto, la desvinculación familiar debido a las dificultades de acceder a las instituciones penitenciarias, puesto que se encuentran en las periferias de las ciudades, por parte de los familiares. Además, hay que tener en cuenta la afección psicológica a la que están siendo sometidos en la medida que no pueden comunicarse o tener noticias continuas de lo que pasa fuera, lo que conlleva desde repercusiones leves (preocupación, falta de apoyo, intranquilidad, etc.), a otras más graves (rechazo social, problemas económicos, etc.) o irreparables (abandono o pérdida de los hijos, divorcios, etc.).

Quinto, provoca desarraigo social. Una vez en libertad no te conviertes en una persona libre sino en un expresidiario que conlleva estigmas que dificultan la creación de nuevas relaciones sociales, la pérdida de posibilidades de cara al empleo, tanto por los estigmas como por la falta de cualificación, el acoso policial y repercusiones psicológicas. Todas estas circunstancias, en muchos casos, conducen a estos individuos a un submundo de delincuencia y reincidencia. Cuántos más años se encuentren dentro de la cárcel menores son las posibilidades de reinserción en la sociedad y, por tanto, mayores son las posibilidades de que el delincuente se afiance a las dinámicas que se producían dentro de manera que reproduzcan actitudes violentas y de inseguridad también fuera de la cárcel provocando que nuevamente puedan ser encerrados. Es un círculo vicioso que se debería de romper con la aplicación de programas multidisciplinarios enfocados en una verdadera rehabilitación y reinserción que evite la reincidencia.

En definitiva, las aportaciones de las medidas privativas de libertad van a consolidar los fracasos anteriores y los futuros de los penados, dejando en estos sujetos efectos psicosociales que van a condicionar

la readaptación de estos en la sociedad y la recuperación de la personalidad del sujeto, puesto que en estas instituciones se refuerzan las identidades sociales prisionizadas, creando una inevitable fractura social (Marcuello- Servós & García- Martínez, 2011, p.57)

6.1 El fenómeno de la prisionalización

Dentro de las instituciones penitenciarias se va a crear lo que se denomina una subcultura carcelaria, la cual va a tener sus propias normas, roles y relaciones. Al hecho de que una persona vaya incorporando, sin ser consciente, los códigos de conducta y valores que se dan dentro de la prisión, es a lo que se va a denominar el fenómeno de la prisionalización (Avilés Quevedo, 2017). Es un proceso psicológico causado directamente por la larga estancia en la prisión. La adquisición de costumbres, usos, el respeto de normas no escritas, las tradiciones, etc., en mayor o menor medida, lo harán la mayor parte de los presos que han estado o vayan a estar un largo período de tiempo y, por tanto, el fenómeno de prisionalización no es un proceso lineal y homogéneo para todos, sino que en alguno influirá de manera muy superficial y a otros de forma más profunda. Uno de los factores de los que dependerá esto, además del carácter individual, es el tiempo dentro de prisión, siendo mucho más profundo este efecto cuánto más tiempo se pase dentro.

En un principio, la prisionalización será superficial, ya que dentro de las prisiones se tiene una organización social particular con normas y códigos de conducta propios, y como instinto de supervivencia el individuo se va adaptando a esta organización. Sin embargo, con el paso del tiempo, hará propios los usos, costumbres y comportamientos que ha ido adquiriendo en relación con su experiencia penitenciaria, olvidando su individualidad, puesto que dependerá del ambiente al que pertenece.

Como toda cultura, la subcultura carcelaria va a estar dotada de un código carcelario, es decir, de normas no escritas que condicionarán el ambiente de la cárcel. Así, las principales normas del código carcelario se pueden resumir en: la no delación, que es el no inmiscuirse en la vida de los demás ni delatarles, la frialdad en las relaciones, no explotar ni aprovecharse de los internos colegas, dureza personal, resistencia mental y física, hostilidad y desconfianza hacia el funcionario. El apoyo al interno produce un conflicto con los funcionarios, y es considerado un ataque a todos (Echeverri Vera, 2010)

Sin embargo, existen diferentes grados de prisionalización en las personas. Los investigadores aún no se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los condicionantes que intervienen en el grado de prisionalización. Se identifican, sin embargo, dos grandes condicionantes: en primer lugar, la personalidad del individuo, ya que algunos rasgos como la madurez o la capacidad de adaptación van a ser factores claves para desarrollar un grado de prisionalización u otro; y, en segundo lugar, las circunstancias externas que afectan a la persona recluida

(...) la frecuencia de los ingresos en prisión, la duración media de las estancias previas, la cuantía de las condenas y el tipo de delitos, las expectativas personales, familiares y sociales mantenidas por el interno, entre otros, constituyen variables importantes para tener en cuenta a la hora de valorar el nivel de prisionalización de un recluso. (Echeverri Vera, 2010, p. 159)

No obstante, la aceptación del código carcelario es total, aunque eso no signifique que ciertos presos no lo lleven a la práctica. Los reclusos con actitudes prosociales suelen tender a rechazar fácilmente el código o a no querer seguir esas pautas, sin embargo, de manera externa hacen ver que así es para no generar rechazo hacia su persona, y poder pasar desapercibidos en la prisión. Habitualmente el código carcelario beneficia al grupo dominante, aunque también a aquellos que toman actitudes prosociales respetando el código, pero no integrándolo.

Por otro lado, cabe señalar que todo este proceso de adaptación por el que pasa el recluso está lleno de inseguridad, miedos, y ansiedad, que afectan directamente a la salud mental. Hay un constante esfuerzo adaptativo por parte del interno que genera altibajos a nivel emocional, alteraciones a nivel cognitivo, afectivo y perceptivo (Avilés Quevedo, 2017, p.340). Entre los efectos psicológicos más destacados, encontramos los siguientes (Echeverri Vera, 2010, pp. 161-164)

La ansiedad. Es uno de los primeros efectos psicológicos, puesto que comienza incluso antes de la entrada en prisión. El nivel de ansiedad va a estar condicionado también por las experiencias y circunstancias de cada individuo, ya que, por ejemplo, una persona que haya ya pasado por prisión y la conozca desarrollará menos ansiedad que alguien que nunca haya estado en ella. O, también, hay una mayor ansiedad en personas que son detenidas en el acto que en las que se encuentran en libertad con posibilidad de entrar en la cárcel. Una vez dentro, este cuadro de ansiedad irá siendo cada vez menor, pero nunca acaba de irse e incluso, dependiendo de los acontecimientos que se den dentro de prisión, sufrirá altibajos.

La despersonalización. Esta es una de las consecuencias más inmediatas que se producen al entrar en prisión, puesto que el ingreso en ella supone desde el principio la asignación de un número que le identifica, y que va a ser el único rasgo que lo va a distinguir de los demás desde fuera. Cuando ingresas, formas parte del conjunto, como uno más, luchando o esperando para salir de la prisión. Además, la percepción de pérdida de identidad es tan común, que muchos de ellos se ven sumergidos en una lucha constante por diferenciarse del resto. La desesperación por tener identidad propia es aún mayor cuando además de convertirse en un individuo al cual sólo diferencian por un número, la imagen que proyecta hacia la sociedad es de rechazo.

Autoestima. La búsqueda de una identidad propia con la que sentirse a gusto y satisfecho con ella es en definitiva lo que va a determinar el nivel de autoestima de las personas. En aquellos donde el delito no suponga otra cosa que una necesidad o un callejón sin salida y que por tanto ingresa por primera vez en prisión, ve su libertad coartada con una sensación de agobio y descrédito social permanente.

Falta de control sobre la propia vida. El control dentro de las instituciones penitenciarias es total, por lo que además de que el recluso no puede tener el control sobre sus propias circunstancias tanto personales, familiares y sociales, como tampoco mucho margen de decisión dentro de la cárcel

Ausencia de expectativas. El único objetivo y aliento que puede llegar a tener el recluso tienen que ver con la libertad perdida. Todos sus esfuerzos, pensamientos y expectativas están puestos en cómo conseguir la libertad en el menor tiempo posible. Se deja de lado cualquier expectativa que no sea la de la libertad.

Finalmente, cabe destacar que todas estas repercusiones psicológicas anteriormente descritas pueden variar según la edad del individuo, el nivel cultural, entendido en términos de capacidades y conocimientos y según la trayectoria penal. Así, a mayor cúmulo de experiencias personales, mayor número de capacidades y de conocimiento de personas y a una mayor reincidencia delictiva mayor facilidad de adaptarse al medio.

En conclusión, como se ha podido comprobar, las personas que sufren un encierro carcelario tienen repercusiones a nivel personal, social y económico. Los niveles de desconexión van a variar según el tiempo de ruptura con el mundo exterior puesto que a más tiempo dentro de la cárcel más difícil es mantener las relaciones con el mundo externo. La cárcel, pese al intento de convertirse en una institución resocializadora, no lo es, ya que está en el seno de su origen el excluir a cierta parte de la población y someterla a sus propias reglas y controles. Es, por tanto, que desde este trabajo se pone en entre dicho, como en tantos otros, que la cárcel tenga alguna función buena en relación a la reeducación y resocialización de individuos que en su mayoría, antes o después, van a acabar volviendo a la sociedad.

7. Conclusiones

Los castigos corporales, el suplicio y los diferentes métodos de castigo iban dirigidos al cuerpo, a la más violenta actuación que se pudiese hacer para castigar los delitos. Actualmente, ha desaparecido el dolor, la brutalidad y espectáculo que era la justicia, sin embargo, el sistema penitenciario y judicial siguen teniendo en común algunos rasgos de esta manera de castigar: se sigue buscando una manera de poder castigar en proporción al delito cometido, ya no a través de un dolor físico, sino a través del *alma*. La falta de libertad, el rechazo de la sociedad, la ruptura de los lazos con la sociedad, con la familia y con la realidad exterior son funciones que cumplen los sistemas penitenciarios actuales y que, a pesar de la evolución hacia diferentes formas de castigar, las penas privativas de libertad siguen siendo mayoritarias.

A lo largo del trabajo, se ha podido ver que los dos temas principales que se han abarcado son la evolución del mercado laboral y la manera en la que el sistema penal ejerce control sobre la sociedad. La evolución de ambos ámbitos no se puede entender por separado, puesto que uno no podría existir sin el otro, esto es, sin la consolidación de un sistema capitalista postfordista residual en España no se habría utilizado el sistema penal como un sistema residual donde apartar los problemas sociales y así evitar políticas sociales que beneficien a las poblaciones en exclusión social y/o pobreza, ya que pese a la dudosa posibilidad que existía anterior a la crisis del fordismo del rumbo de las instituciones penitenciarias hacia su extinción dado el carácter rehabilitador que había ido tomando, podría no necesariamente haber tomado un rumbo tan directo hacia su extinción, pero no hubiera significado la reconceptualización de la cárcel como un mal necesario donde la severidad del castigo y la criminalización de ciertos colectivos sociales están otra vez presentes. De esta forma, el sistema de seguridad sigue siendo una herramienta clave para mantener un orden y un *statu quo* de muchos colectivos y, por tanto, va a ser utilizada según convenga a los poderes públicos. En el caso de España, la evolución del sistema penal ha estado marcada a grandes rasgos, además de por el establecimiento del postfordismo, por la falacia del aumento de delincuencia y por ello el endurecimiento del código penal, el auge de las ideologías más conservadoras, el aumento de la inmigración y por la recesión económica.

Por otra parte, uno de los objetivos del presente trabajo era desvincular la exclusión social y/o la pobreza como rasgos propios de los delincuentes, en otras palabras, se intenta huir del tópico en el que se considera que una mayor tasa de exclusión social y/o pobreza está directamente relacionada con un aumento de la tasa de criminalidad, la cual es confusa de por sí porque existen diferentes tasas de medición de la delincuencia, como el número de ingresos nuevos, el número de sentencias, el número de casos que se conocen pero que no se han judicializado, etc., y cada una con diferentes matices que habría que analizar y explicar. Hay una clara conclusión, y es que los datos que disponemos de criminalidad obtenidos por organismos estatales e internacionales oficiales no se corresponden con este tópico, ya que es incluso durante el crecimiento económico cuando hay una subida del número de personas que entran a prisión y un aumento

de los años de internamiento. En este caso, se puede hacer referencia a estos datos como detractores del imaginario social que señalábamos puesto que manifiestan el no cumplimiento de este, sin embargo, siguen existiendo multitud de factores que explican por qué se puede llegar a producir este aumento de criminalidad en los diferentes colectivos en riesgo de exclusión y/o pobreza, que nada tienen que ver con que sea una población más peligrosa, sino que está más relacionada con el lugar o hacia qué colectivos desde el sistema judicial y del Estado ponen el foco criminalizador, ya que va a influir directamente en el aumento o disminución de los casos de delito que en estas poblaciones se encuentren. Por ejemplo, hay una tasa elevada de personas condenadas por delitos de violencia de género porque se ha puesto desde el Estado un foco criminalizador hacia estas actitudes, lo cual no indica que anteriormente no haya habido situaciones de violencia, sino que al no haber estado siendo investigado y criminalizado, no se extraían casos como está pasando actualmente.

Además de producirse esta criminalización fuera de los espacios penitenciarios, también encontramos que dentro de estos espacios se reproduce el mismo sistema segregacionista, pero esta vez de manera directa, desde el sistema judicial e institucional. La cárcel se creó con esa idea y se mantiene con el paso del tiempo, puesto que está en su propia naturaleza y definición. Los efectos de esta en los presos están siendo cada vez más investigados, sobre todo aquellos que inciden en la parte psicológica y conductual de estos, llegando a conclusiones cada vez más homogéneas, las cuales defienden la búsqueda de un sistema más humanitario y que asegure la reinserción de los individuos en la sociedad.

Es de vital importancia que el Trabajo Social Crítico sea a través del cual se aborden estas cuestiones, ya que este se aleja del asistencialismo y de la complicidad con el sistema económico actual. El Trabajo Social debe de ir evolucionando, ya que los modelos que funcionaban han dejado de hacerlo y se deben buscar nuevos que se adapten al contexto de la globalización, neoliberalismo, etc.

“La diferencia del TS crítico con el ortodoxo o tradicional radica en la consideración de las personas como sujetos de derechos, no como objetos de asistencia o protección”(Sanchez Alías & Jimenez Sanchez, 2013, p. 148)

El Trabajo social puede llegar a tener un impacto fundamental en relación con la prevención de la exclusión social siempre que se aborden desde una perspectiva no asistencialista y no humanitaristas y, por tanto, que se haga desde nuevos métodos más efectivos, como el trabajo social comunitario, especializado en dar herramientas a las comunidades para su desarrollo individual.

Este año, con la crisis sanitaria se ha puesto de manifiesto lo que lleva mucho tiempo ya latente y es la necesidad urgente de desmercantilización de los derechos y desintegrar la idea de que se puede mantener unos niveles de desigualdad tolerables, ya que se ha legitimado la gestión del mercado asistencial que deriva en humanitarismo, haciendo que el sujeto receptor de este pierda la cualidad de sujeto de derechos.

El receptor de ayuda humanitaria forma parte, por definición, de una masa apartada por la economía política al campo de lo prescindible y sacrificable. El debate se reduce entonces, en su versión más obscena, a dirimir si es mejor hacer (sobre)vivir o dejar morir (Jimenez Franco, 2020, p.6)

Por tanto nos debemos de hacer todos los miembros de la sociedad y especialmente por la condición que su profesión les otorga a las-os trabajadoras-es de lo social “cuánta condescendencia, colaboración, amnesia y desprecio estamos dispuestos a suscribir” (Jimenez Franco, 2020). Es imprescindible tener claro que las medidas tomadas desde el gobierno son insuficientes e ineficientes para solucionar el grave daño social producido por los salvajes recortes en derechos sociales, como lo es el ingreso mínimo vital condicionado y no-universal, evitando así no hacerse cargo de la responsabilidad sobre las causas de agresión social causada.

Así, en el último capítulo de nuestra vía de subdesarrollo, arbitrada por un estado de derecho que abandona los derechos, el ancla ética de la industria del rescate (la redención por el trabajo) cede terreno a su inversión humanitarista – la limosna, santa de origen(...) La mirada humanitarista funciona despolitizando, convirtiendo esa desnudez en marca identitaria del objeto de rescate la mirada humanitarista culmina el proceso por el cual los sujetos expulsados no sólo son convertidos en no-ciudadanos sino también en sub-humanos (Jimenez Franco, 2020, p.10)

Daniel Jiménez Franco (2020) en su ensayo *2020 y el ultimátum de lo social* habla sobre la hipótesis de extinción de la intervención social tal y como se conoce, bien por la sustitución de los recursos sociales por dispositivos de control securitario o por obra de un cambio estructural que tenga como base la universalización de los derechos. Como actores sociales, nuestra misión es luchar porque se extinga por la segunda vía. Es imprescindible la unión de todos los profesionales movidos por un mismo objetivo, el de conseguir un programa de máximos universal e irrenunciable (Jimenez Franco, 2020,p.12)

en el que además incluya la exigencia de verdad, justicia y reparación ante las agencias, instituciones y corporaciones responsables y beneficiarias del proceso que ha desembocado en el actual colapso; un plan peleado en colectivo, nos cueste lo que nos cueste, pues nunca será mayor el coste que la recompensa.

8. Bibliografía

- Avilés Quevedo, E. (2017). El fenómeno de la prisionalización. Complejo penitenciario Islas Marías. *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas: RICSH*, 6(12), 336-360.
- Beccaria, C. (1764). *De los delitos y las penas*. Italia: Harlem.
- Brandiz, J. Á., Fernández de rota, A., G. Soto, L., San Martín Segura, D., Cardesín, J. M., González, R., & Viejo Viñas, R. (2009). *La globalización en crisis. Gubernamentalidad, control y política de movimiento*. (Universidad Libre Experimental, Casa Invisible y Universidade Invisíbel. ed.). Málaga.
- Cabrera Cabrera, P. J. (2002). Cárcel y exclusión social. *Revista del MInisterio de trabajo y asuntos sociales*, 85.
- Cid, J. (2020). El futuro de la prisión en España. *Revista Española de Investigación Criminológica (REIC)*, 1-32.
Obtenido de <https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/285/197>
- de la Cuesta Arzamendi, J. (1993). La resocialización: objetivo de la intervención penitenciaria. *Papers d'estudis i formació*, 12, 9-21.
- Echeverri Vera, J. a. (2010). La prisionalización, sus efectos psicológicos y evaluación. *Pensando Psicología*, 6(11), 157-166.
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. (A. Garzón del camino, Trad.) Argentina: Siglo veintiuno editores.
- Friedman, M. (. (1999). Milton Friedman. *Revista bancomext*, 15-30.
- Garrido Genovés, V. (2010). La prevención de la delincuencia en europa y enespaña: los retos pendientes. *Revista de derecho penal y criminología*(39), 377-408. Obtenido de <http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2010-3-5100>

- Gómez Bravo, G. (2006). Educar o castigar: la lucha del reformismo penitenciario español en el siglo XIX y principios del XX. *Revista de Educación*, 597-624.
- González, M. C. (2006). Flexibilización de las relaciones laborales. Una perspectiva teórica postfordista. *Gaceta Laboral*, 12(1).
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. (A. Varela Mateo, Trad.) Madrid: Ediciones Akal, S. A.
- Hayek, F. A. (2001). *Principios de un orden social liberal*. Madrid: Unión Editorial.
- Huerta moreno, M. G. (2005). El neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario. *Scielo*(24). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422005000200006
- Jimenez Franco, D. (15 de Junio de 2020). *Neoliberalismo y humanitarismo: 2020 y el ultimátum de lo social*. Obtenido de unenormecampo: <https://unenormecampo.wordpress.com/>
- Lipietz, A. (1997). El mundo del postfordismo. *Ensayos de economía*, 7(12), 11-52. Obtenido de <https://revistas.unal.edu.co/>
- López Melero, M. (2012). Evolución de los sistemas penitenciarios y de la ejecución penal. *Anuario Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá*, v, 401-448. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10017/13803>
- Lutz, B. (2013). Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social. *Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad*, 20(57). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-05652013000200007&script=sci_arttext
- Marcuello- Servós, C., & García- Martínez, J. (2011). La cárcel como espacio de de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario español? *Portularia*, XI(1), 49-60.
- Martinez-López, J., & Sanchez Carbonell, M. (2019). Nuevas respuestas a la pobreza y exclusión social del Trabajo Social: la Mesa ISAE. *Cuadernos de Trabajo social*, 32(2), 301-313.
- Nicole Roldán, P. (s.f.). *Economipedia. Haciendo fácil la economía*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/monetarismo.html>

- Olver Gómez, R. M. (2006). *Una mirada al concepto de pobreza. Análisis del concepto de pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a fines del siglo XX*. Libros en Red.
- Peña Martínez, J. (2019). De la sociedad disciplinaria a la sociedad de control: la evolución de las formas de control y sus mutaciones en las cárceles españolas. 36-37. Madrid, España.
- Sanchez Alías, A., & Jimenez Sanchez, M. (2013). Exclusión social: fundamentos teóricos y de la intervención. *Investigaciones en Intervención social*, 3(4), 133-156.
- Varona, D. (2008). Ciudadanos y actitudes punitivas: un estudio piloto de población universitaria española. *Revista Española de Investigación Criminológica*, 1-38.
- Wacquant, L. (2010). *Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Barcelona: Gedisa.
- Wagman , D. (2002). Estadística, delito e inmigrantes. *Boletín CF+S*(21). Obtenido de <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n21/adwag>